



Santiago de Cali, enero del 2024

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO- REPARTO

Ciudad

Ref. **Medio de Control Reparación Directa**

Demandante: María Camila Cabrera González

Demandado Distrito de Santiago de Cali
 notificacionesjudiciales@cali.gov.co
 Secretaria de Infraestructura
 notificacionesinfraestructura@cali.gov.co

JOSE JULIAN ARANGO ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 352.270 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ, MARTHA LUCIA GONZALEZ ARTUNDUAGA, MARIA RUDBELIA ARTUNDUAGA LOAIZA, DIANA GONZALEZ ARTUNDUAGA, JOSE LUIS GONZALEZ ARTUNDUAGA, CLAUDIA PATRICIA VILLOTA CUASQUER**, actuando a nombre propio y de acuerdo al poder otorgado, acudimos a esta Honorable Corporación para impetrar medio de control- **Reparación Directa en contra del Distrito de Santiago de Cali, Secretaria de infraestructura del Distrito de Santiago de Cali**, para que por los medios previstos en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, con citación y audiencia a la parte demandada y del agente del Ministerio Publico, se declare la responsabilidad patrimonial de los perjuicios causados a la parte demandante como consecuencia de las lesiones y perturbaciones sufridas por la señora **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ** a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 2022 cuando se movilizaba en calidad de conductora de la motocicleta de placa UKR07C, marca honda Wave 100, color negro, modelo 2012 asegurada con la compañía de seguros Suramericana, con licencia de conducción 1.193.572.134 categoría A 2 y a la altura de la calle 10 con carrera 50 y 52 presento accidente de tránsito a causa de huecos sobre la vía.



LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

1. **PARTE DEMANDANTE:** Está compuesta por las siguientes personas:

MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No 1.193.572.134 de Cali (Victima)

MARTHA LUCIA GONZALEZ ARTUNDUAGA identificada con cédula de ciudadanía No 29.121.581 de Cali (Madre)

MARIA RUDBELIA ARTUNDUAGA LOAIZA identificada con cédula de ciudadanía No 65.680.230 de Rioblanco (Abuela)

DIANA GONZALEZ ARTUNDUAGA identificado con cédula de ciudadanía No 31.569.127 de Cali (tía)

JOSÉ LUIS GONZALEZ ARTUNDUAGA identificado con cédula de ciudadanía No 14.679.577 de Cali (Tío)

CLAUDIA PATRICIA VILLOTA CUASQUER identificada con cédula de ciudadanía No 36.953.465 de Pasto (tía política)

Apoderado de la parte demandante. **JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.258.847 de Tuluá y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 352.270 del Consejo Superior de la Judicatura.

PARTE DEMANDADA

Corresponde al Distrito de Santiago de Cali y la secretaría de infraestructura del Distrito Judicial de Santiago de Cali.

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare patrimonialmente responsable al Distrito de Santiago de Cali y a la secretaría de infraestructura del Distrito Judicial de Santiago de Cali, Por todos los perjuicios ocasionados a **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ, MARTHA LUCIA GONZALEZ ARTUNDUAGA, MARIA RUDBELIA ARTUNDUAGA LOAIZA, DIANA GONZÁLEZ ARTUNDUAGA JOSE LUIS GONZALEZ ARTUNDUAGA, CLAUDIA PATRICIA VILLOTA CUASQUER**, a raíz de las lesiones y perturbaciones económicas/ psicológicas sufridas por la señora **María Camila**



Cabrera González resultando gravemente lesionada, siendo trasladada a la Clínica Colombia donde recibe la atención medica permanente, presentando fractura galeazzi derecha, fractura distal del radio, luxación radio-ulnar distal, con cirugía osteosíntesis con placa volar más reparo de ligamento y fijación de la articulación radio-ulnar distal con clavo liso de kirchner. Finalmente fue valorada por medicina legal con diagnóstico de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente.

SEGUNDA. Que, como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar las siguientes sumas de dinero:

I. PERJUICIOS MATERIALES

1.1. Lucro Cesante. Su fundamento en el caso bajo examen se encuentra en la pérdida de capacidad laboral de la joven Maria Camila Cabrera González, como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas causadas en el suceso que da origen a esta reclamación. Para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta:

(I) El porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, **que podrá estar oscilando** en un treinta por ciento (30%), según las características de las afectaciones físicas y psicológicas/psiquiátricas sufridas por Maria Camila Cabrera González

(II) Los ingresos promedio mensuales, es decir para los efectos para la época en que ocurrió el siniestro octubre del año dos mil veintidós (2022) se ganaba un básico de un millón doscientos mil pesos (\$ 1.200.000)

(III) El periodo de vida probable de la afectada, es decir con cuarenta y tres (43) años de expectativa de vida laboral, de conformidad con el documento de Proyecciones de Población expedido por el Departamento Nacional de Estadística de septiembre de 2022.



(IV) Los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización.

La suma arrojada será actualizada, conforme la siguiente fórmula:

$$Ra = R \times \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

Ra Renta actualizada que se busca

R La renta o ingreso a actualizar para la fecha de los hechos

Índice final índice de precios al consumidor a la fecha del incidente regulador

Índice inicial índice de precios al consumidor a la fecha de causación del perjuicio

La indemnización comprenderá dos períodos:

a. Vencido o consolidado, que se establezca aplicando la fórmula:

$$Rc = \frac{Ra (1+i)^n - \frac{Ra}{i}}{i}$$

Rc Lucro cesante consolidado

Ra ingreso base de liquidación

i Interés puro o técnico del 6 % mensual o 0.004867 mensual

n Período (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

b. Futuro o anticipado, que se halla mediante la fórmula:

$$Rf = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i (1+i)^n}$$

Rf Lucro cesante futuro



Ra Ingreso base de liquidación

I interés puro

N número de meses a liquidar

De acuerdo con los factores mencionados y contando que la señora Maria Camila nació el 06 de febrero del 2002, de manera que para la fecha de las lesiones contaba con 20 años de edad, por ende, tiene un periodo de vida probable de 57.41¹ años equivalentes a 688,92 meses

Podría tasarse aproximadamente este perjuicio en la suma de ciento setenta millones de pesos (\$170.000. 000.00) m/cte., o lo que resulte probado.

DAÑO EMERGENTE

Con motivo de las graves afectaciones física sufridas por la señora **MARIA CAMILA CABRERA GONZÁLEZ**, se ha hecho necesario asumir los siguientes gastos:

1. Factura de venta N° 427802 emitida por Sociedad Oyola S.A.S Nit 900.476.148-9 por concepto de daños al vehículo automotor, por la suma de doscientos treinta mil pesos (\$230.000)
2. Factura de venta N° 42724 emitida por Sociedad Oyola S.A.S Nit 900.476.148-9 por concepto de daños el vehículo automotor, por la suma de noventa y dos mil seiscientos pesos (\$92.600)
3. Gastos de transporte del mes de octubre del 2022 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de doscientos cincuenta y ocho mil pesos (\$258.000)
4. Gastos de transporte del mes de noviembre del 2022 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de trescientos treinta y tres mil pesos (\$333.000)
5. Gastos de transporte del mes de diciembre del 2022 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de doscientos ochenta y siete mil pesos (\$287.000)

¹ Resolución N° 0497 del 20 de mayo de 1997, Superintendencia Financiera de Colombia



6. Gastos de transporte del mes de enero del 2023 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de trescientos setenta y dos mil pesos (\$372.000)
7. Gastos de transporte del mes de febrero del 2023 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de ciento catorce mil pesos (\$114.000)
8. Gastos de transporte de los meses de marzo, abril y mayo del 2023 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de ciento cincuenta y cinco mil pesos (\$155.000)
9. Gastos de transporte del mes de junio del 2023 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de trescientos cuarenta y cuatro mil pesos (\$344.000)
10. Gastos de transporte del mes de julio del 2023 por concepto de desplazamientos a citas con ortopedia y terapia física por un valor de doscientos sesenta y un mil pesos (\$261.000)
11. Factura de venta No. FIA 76873 por un valor de dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos veintisiete pesos (\$2.458.327.00) que corresponde al pago del semestre de la facultad de microbiología de la Universidad Santiago de Cali, carrera que cursaba la señora Maria Camila y que por motivos de las lesiones causadas a raíz del accidente tuvo que cancelar el semestre.

Para un total de DAÑO EMERGENTE de cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos veintisiete pesos (\$4.834.927)

En forma subsidiaria solicitamos a la entidad ordenar el pago de este estipendio conforme la cuantía que se sirva determinar atendiendo los principios de equidad y de reparación integral, así como las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corporación Internacional que ha entendido bajo ciertas circunstancias que este perjuicio puede presumirse, y que no obstante no lograr probarse, la *equidad* surge como criterio para su estimación.

La regulación de la responsabilidad patrimonial en el ordenamiento jurídico patrio, consagra el postulado del resarcimiento íntegro de los perjuicios inferidos a otra persona. Así, el artículo 16 de la ley 446 de 1998 prevé que *"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración*



de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales".

En dicho sentido ha explicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

[E]l juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño. Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio.

Y si bien es cierto, "...de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (art. 174 del C. de P. Civil), toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio, supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos de los artículos 1599 y 1617 núm. 2 del C. Civil. Sin embargo, una es la prueba del daño, o sea la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente tutelado, y otra, la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ahí que la doctrina haga alusión al contenido patrimonial del daño para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), como patrón de referencia para determinar la mensura, por cuanto considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que más conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual opera una reparación por equivalencia o propiamente indemnizatoria, por oposición a la reparación natural que implica 'volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el hecho dañoso'

Así como lo insistido la máxima Corporación de la jurisdicción ordinaria civil:

Es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se torna extremadamente difícil, no obstante, el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante. Al respecto se ha expresado que '[...]con referencia específica al invocado principio de la

equidad, vale la pena recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas" (Cas. Civ. 5 de octubre de 2004. Exp. 6975)

II. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1 Perjuicios morales

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito afectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual, situaciones, que como se demostrará; se evidenciaron tanto en la afectado, como sus familiares más allegados

Atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y la sentencia del Consejo de Estado **Sección Tercera, Sentencia 27001233100020090017701 (41517), Sep. 17/18**, la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tratará así:

Es preciso mencionar que se realiza la tasación de perjuicios morales asumiendo que la pérdida de capacidad de la señora Maria Camila sea de un 30% o lo que resulte probado.

- **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ** sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo.
- **MARTHA LUCIA CABRERA GONZALEZ** sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo.
- **MARIA RUDBELIA ARTUNDUAGA LOAIZA** treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe



el acuerdo.

- **JOSE LUIS GONZALEZ ARTUNDUAGA** veintiuno (21) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo.
- **DIANA GONZALEZ ARTUNDUAGA** veintiuno (21) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo.
- **CLAUDIA PATRICIA VILLOTA CUASQUER** veintiuno (21) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la providencia que apruebe el acuerdo.

Para la fecha de los hechos la señora **Maria Camila Cabrera González** cursaba la carrera de Microbiología en la Universidad Santiago de Cali, la cual a raíz de grave lesión causada en accidente de tránsito por mal estado de la vía se vio obligada a cancelar el semestre toda vez que el proceso de recuperación fue lento y con múltiples terapias físicas, además la lesión en su muñeca le impedía que desarrollara las actividades prácticas en el laboratorio de la facultad (Siembra de cultivos). A la fecha de la presentación de esta convocatoria a conciliación mi poderdante además de la deformidad física en su muñeca que afecta notablemente el estado psicológico de mi representada, es una joven de 21 años de edad que presenta una cicatriz considerable que afecta su autoestima como mujer, aunado a ello la lesión generó una alteración en el pulso de Maria Camila que ha afectado notablemente su carrera profesional.

2.2. Daño a la salud o fisiológico.

En relación al perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud , derivado de las lesiones a la integridad psicofísica de las víctimas directas, el Honorable Consejo de Estado unificó la jurisprudencia, reiterando la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222 ambas del 14 de septiembre del 2011, en el mismo sentido de que la regla general en materia indemnizatoria por este concepto es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMLMV, siempre que esté debidamente motivado, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida. Así se plasmó en sentencia

de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Ex 28832 C.P Danilo Rojas. Actos Andrea Erich Sholen: Demandado Ministerio de Justicia y Derecho Instituto Nacional Penitenciario.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto , y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, insistió

El concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.” (Resaltado fuera de texto).

Bajo las consideraciones de las graves lesiones sufridas por la señora Maria Camila, a causa del mal estado de la vía, tenemos un desmedro en su salud que generó afectaciones psico-físicas que deberá ser reparada por la institución convocada, teniendo en cuenta lo señalado por el Instituto de Medicina Legal Y ciencias Forenses (Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio), como también el hecho que la perjudicó indefectiblemente y en general la zozobra producto del accidente de tránsito que afectó sus actividades rutinarias como utilizar su medio de transporte.



La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión que apruebe el acuerdo.

Daño del derecho a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre, como daño a otro derecho constitucional

El objetivo de la reparación es fundamentalmente devolver las cosas a su estado primitivo, *in natura*; no obstante, hay eventos que por su naturaleza impiden lograr ese tipo de reparación, de allí que surjan las indemnizaciones y las compensaciones como forma reparatoria. No obstante, la reparación no puede traducirse en un beneficio para el perjudicado, es decir no puede ir más allá, o de percibir más de lo que perdiere como consecuencia del daño.

Si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha realizado serios estudios que permitan estructurar una tipología adecuada de los daños inmateriales, construida sobre la base de los principios de reparación integral y el "no enriquecimiento sin causa", no ha sido del todo pacífica la discusión, aún más cuando el escenario ofrece un alto grado en la polémica pues vr. gr. la doctrina refiere multiplicidad de daños inmateriales; la evidente dualidad de conceptos en lo que atañe a la finalidad de la reparación, es decir si se indemniza el daño evento o la consecuencia del mismo. Sin embargo, encontramos que en el mismo sentido nuestro Consejo de Estado advierte, a pesar de categorizar los daños inmateriales en clases que no llamen a confusiones, el daño moral y daño a la salud; la viabilidad de encontrar otros daños inmateriales, atendiendo el interés y el derecho permeado por el evento antijurídico, aunque permitiéndose únicamente en asuntos diferentes a las reclamaciones por lesiones psico-físicas. Sostuvo

*Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) **cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de "daño corporal o afectación a la integridad psicofísica" y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso***



su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación//

Sin embargo, debemos comprender que el daño a la salud, no obstante, envuelve el daño- evento y el daño-consecuencia, su capacidad reparatoria no abarca el menoscabo de otro tipo de intereses y derechos amenazados o quebrantados, que no hacen parte de la consecuencia de la lesión psico-física

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia, ha sostenido:

//Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente patrimonial, el perjuicio extrapatrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.

Así fue reconocido por esta Sala en providencia reciente, en la que se dijo que ostentan naturaleza no patrimonial: "...la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva..." (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya]

Estas subespecies del daño extrapatrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica; aunque a menudo suele acontecer que confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo.

Discurrió la misma Corporación en este sentido:

*//De ahí que **el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras**, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como **vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.***

Las dos primeras formas de perjuicio han sido amplia y suficientemente desarrolladas por esta Corte. El menoscabo a los bienes jurídicos personalísimos de relevancia



constitucional, en cambio, aunque se ha enunciado tangencialmente por la jurisprudencia, no ha sido materia de profundización, dado que hasta ahora no se había planteado ese asunto en sede de casación.

Y es que esta nueva concepción, como lo sostiene la alta Corporación de la jurisdicción ordinaria, obedece a que “el constitucionalismo se convirtió de ese modo en el nuevo paradigma del orden jurídico, cuyo influjo ha repercutido en las demás áreas del derecho positivo, incluido el derecho civil, naturalmente, que además de la función que tradicionalmente ha cumplido como regulador de las relaciones privadas, asume ahora un carácter protector de los derechos inalienables.

(...) La atención debe centrarse, entonces, no en la posibilidad de admitir la indemnización del daño a los bienes personalísimos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales, como categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extrapatrimoniales – pues su existencia hoy en día no se pone en duda–; sino en precisar en qué casos resulta viable su concesión, con el fin de evitar un pago doble o exagerado de una misma consecuencia nociva que tiene su causa adecuada en un único evento.

De manera que, por regla general, el desagravio del perjuicio no patrimonial carece de la virtualidad de producir un enriquecimiento injusto, pues los bienes jurídicos inherentes a la persona humana no tienen equivalencia en dinero. Luego, si la medida de satisfacción que se reconoce no lleva implícito un provecho económico sino más bien de simple consolación, satisfacción o compensación, entonces es desacertado afirmar que la misma puede dar lugar a cualquier tipo de lucro (...).

Así pues en aras de satisfacer cada interés legítimo lesionado con el hecho dañoso, en el caso de autos, tenemos que además de apalear sus derechos fundamentales a la vida, el respeto por la integridad física, se generó el menoscabo de un interés diferente que no es resarcido con el reconocimiento del daño a la salud, pues además de afectarse la integridad física, el menoscabo de otros derechos constitucionales, se han visto sacudidos, como consecuencia de la afectación, así sus actividades cotidianas, deportivas, recreacionales, resultaron frustradas por la incapacidad física arrojada. De tal suerte que el disfrute a plenitud de su vida, la



recreación, como un derecho fundamental, se han visto seriamente afectados con la situación ocurrida.

Recordemos que el contenido del artículo 52 constitucional, del derecho al deporte a la recreación y la educación física, plantea en su núcleo esencial la función a nivel individual, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y, a nivel social, el desarrollo social del país a través de su función socializadora, integradora y pacificadora.

La consagración del deporte como derecho tuvo como referente internacional el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consideró al deporte como un derecho social. En 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la UNESCO ratificó en el mundo no sólo la importancia que tiene el deporte, sino también la educación física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de educación, formación integral de las personas y enriquecimiento de la cultura.

Sin duda alguna la aniquilación de algunas tareas recreacionales para la afectada Cabrera González como el desarrollado de tareas deportivas y/o culturales desencadenaron un desarrollo anormal de su vida que debe ser reparado, por la conculcación de su derecho constitucional a la recreación, al despliegue de actividades lúdicas, de la capacidad para su realización, que como consecuencia del daño sufrido se generaron.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión que apruebe el acuerdo, y a favor del lesionado.

OTRAS MEDIDAS REPARATORIAS

La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de



"reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad".

En virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resulta efectivos al momento de interpretar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de su reparación. Precisamente el órgano judicial internacional ha trazado parámetros que nos muestra que la reparación a la víctima trasciende más allá de la obligación de dar, de lo pecuniario, para obligar al causante a hacer, como una forma de reparar integralmente el perjuicio causado.

Respecto a la procedencia de este tipo de medidas correctivas, el H. Consejo de Estado sostuvo:

Como se precisó, el daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial. Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda -o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez- tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena. No obstante, si lo anterior deviene imposible en términos materiales, resulta imprescindible establecer cuál es la magnitud del daño antijurídico y qué medidas de reparación pueden ser decretadas para resarcir las consecuencias de aquél, como por ejemplo la indemnización por equivalente. Así las cosas, la reparación no se asimila a indemnización, ya que esta última constituye uno de los varios componentes que integran a la primera y, por ende, la relación que existe entre uno y otro concepto es de género y especie, motivo por el cual el daño antijurídico desde el paradigma actual de la reparación desborda el que impone el concepto de patrimonio. Los anteriores lineamientos se acompasan con las posturas y tendencias modernas de la responsabilidad que desbordan el concepto de "responsabilidad patrimonial", para adoptar la categoría de "derecho de daños", en el que el eje central lo constituye la persona que padece la afectación y, por consiguiente, la principal función de la responsabilidad en el mundo moderno consiste no tanto en sancionar conductas como en restablecer los derechos, bienes o intereses legítimos que se afectan con la



producción de un daño. En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos -fundamentales- de los demandantes.

TERCERO. Que el valor de la indemnización acordada se liquide con la acusación de los intereses desde la fecha del reconocimiento hasta el momento efectivo del pago de la suma decretada.

HECHOS

PRIMERO. El núcleo familiar de la señora **MARIA CAMILA CABRERA GONZÁLEZ** está compuesto por su madre **MARTHA LUCIA GONZALEZ ARTUNDUAGA**, su abuela **MARÍA RUDBELIA ARTUNDUAGA LOAIZA**, sus tíos **JOSE LUIS GONZALEZ ARTUNDUAGA**, **DIANA GONZALEZ ARTUNDUAGA Y CLAUDIA PATRICIA VILLORA CUASQUER**, quienes se tiene gran respeto, afecto y amor entre ellos, por lo que se vieron afectados notablemente por el estado de salud de la señora Maria Camila, a causa de accidente de tránsito, asimismo fueron las personas que hicieron el acompañamiento para la recuperación de mi representada.

SEGUNDO. Para el año en que ocurrieron los hechos la señora **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ** devengaba un salario básico de un millón doscientos mil pesos (\$1.200.000) cómo se valida en los anexos presentados en la relación de medios probatorios.

TERCERO. A los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022) a la altura de la calle 10 entre carrera 50 y 52 presento accidente de tránsito cuando mi representada se movilizaba en calidad de conductora de la motocicleta de placa UKR07C, marca Honda wave 100, color negro, modelo 2012, asegurada con la compañía de seguros suramericana y presento siniestro vial por mal estado de la vía (huecos)

CUARTO. Mi representada fue trasladada en ambulancia hacia la Clínica Colombia, el diagnóstico fractura galeazzi derecha, fractura distal del radio, luxación radio-ulnar distal, con cirugía osteosíntesis con placa volar más reparo de ligamento y fijación de la fractura galeazzi derecha, fractura distal del radio, luxación radio-ulnar distal, con cirugía



osteosíntesis con placa volar más reparo de ligamento y fijación de la articulación radio-ulnar distal con clavo liso de kirchner.

QUINTO. Desde el accidente la joven Maria Camila ha sido involucrada en constantes tratamientos clínicos para superar sus dolencias, que han permeado notablemente su capacidad física que se ha visto reflejado en el impedimento para el desarrollo normal de su actividad económica de la que estuvo alejada por varios meses, Súmese a la evidente pérdida de su capacidad física para el desenvolvimiento de sus faenas laborales que sin duda alguna repercutirán en su productividad.

SEXTO. Fue valorada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los veintiséis (26) días del mes de octubre del 2023 por la profesional Maria José Benavides Erazo quien diagnostico deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente.

SÉPTIMA. Esta lamentable condición física provocó que, durante mucho tiempo, requiriera del apoyo de sus familiares, quienes estuvieron haciendo el acompañamiento pertinente durante el proceso médico.

OCTAVA. El episodio ha ocasionado un desconsuelo absoluto a la lesionada, tristes son las consecuencias del nefasto suceso, generado a la víctima y familiares, producto de los constantes episodios depresivos que han permeado a la totalidad del grupo familiar. Condición que se ha reflejado en la apatía al desarrollo de los eventos recreativos que realizaban con cierta asiduidad.

NOVENA. Mi representada tiene tres años de experticia conduciendo motocicleta, no ha presentado más accidentes de tránsito, su licencia de conducción No 1004353382 con vigencia, no registra multas en el portal WEB del SIMIT, tampoco se registran inmovilizaciones por accidentes de tránsito en el portal Web de CDAV.

DÉCIMA. El siniestro vial tuvo conocimiento de autoridad de tránsito con número de reporte IPAT A001523601, hipótesis - huecos en la vía, datos de quien conoce el accidente Hubert Castañeda Gil cc 94416334.



DÉCIMO PRIMERO. La prueba de alcoholemia tomada por la autoridad de tránsito pertinente fue negativa

DÉCIMO SEGUNDO. El siniestro vial quedó registrado en fiscalía general de la Nación con el spoa N° 760016000199202314292, Fiscalía 20 Local

DÉCIMO TERCERO. La joven **Maria Camila Cabrera González**, cursaba la carrera de Microbiología en la Universidad Santiago de Cali, la cual a raíz de la grave lesión causada en accidente de tránsito por mal estado de la vía se vio obligada a cancelar el semestre toda vez que el proceso de recuperación fue lento y con múltiples terapias físicas, además la lesión en su muñeca le impedía que desarrollara las actividades prácticas en el laboratorio de la facultad (Siembra de cultivos).

DÉCIMO CUARTO. A la fecha de la presentación de este libelo demandatorio, mi poderdante además de la deformidad física en su muñeca que afecta notablemente el estado psicológico de mi representada, es una joven de 21 años de edad que presenta una cicatriz considerable que afecta su autoestima como mujer, aunado a ello la lesión generó una alteración en el pulso de Maria Camila que ha afectado notablemente su carrera profesional.

DÉCIMO QUINTO. El mantenimiento de la vía pública donde ocurrió el incidente corresponde a las entidades demandadas Municipio Santiago de Cali- secretaria de Infraestructura, tal como se confirma en el contenido del comunicado fechado para los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) firmado por la Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial de Santiago de Cali, agregado a la reclamación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Constitución Nacional, artículos 1, 2, 6, 90, 93, 217, 318 y 365.

En su artículo 90, reza:



El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas

Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1,

11, 22. Sostiene en su artículo 1,

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

(...)"

Por su parte en el artículo 5 se destaca el Derecho a la Integridad Personal

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral."

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Ley 1437 de 2011.

La Ley 446 de 1998, artículo 16

FUNDAMENTOS DE LA RECLAMACIÓN

1. Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que

"las autoridades de la República están instituidas - para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

El artículo 90 de nuestra Constitución señala que "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas". La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

Nuestra Carta en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, cómo puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace

varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuridicidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuridicidad objetiva, **que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.**

2. Régimen de la falla del servicio para derivar la responsabilidad de la entidad pública

Ahora debemos precisar los aspectos que nos llevan indefectiblemente a responsabilizar a la entidad pública de los perjuicios originados a los reclamantes, pues como se logrará demostrar en el devenir del proceso, esto es atribuible a la falla de la administración pública, en quien concurren los elementos constitutivos del régimen de falta como generadora del deber resarcitorio a cargo de ella. Para ello resulta indispensable que tengamos en cuenta lo que jurisprudencialmente se han destacado como los requisitos para la constitución de la falla administrativa:

Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "FALTA O FALLA DEL SERVICIO", o mejor aún falta o falla de la administración, trátase de simples actuaciones, omisiones hechos y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y se requiere: a) Una falta o fallas del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración; b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano; c) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc., y d) Una relación causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización..."

Para efectos de hacer claridad de la responsabilidad que pudiere recaer sobre la entidad demandada es necesario referirse a los elementos estructurales que conllevan

a la afirmación que el incidente tuvo una causa directa y eficiente: el mal estado de la vía (hueco) o cual desencadenó que la señora Maria Camila Cabrera González, provocando el nefasto desenlace. En el caso que nos ocupa, resultará evidente la falla de la entidad acusada, pues en primer demostraremos:

2.1. El hecho irregular. Es sabido que corresponde a la administración departamental el debido mantenimiento de la vía pública donde ocurrió el aciago accidente, por ende, está a su cargo la revisión, corrección de imperfecciones, así como la señalización adecuada de la misma, en caso de alguna anomalía.

La seguridad de los usuarios de las vías públicas, es uno de los considerados deberes propios de las administraciones públicas, dentro de las finalidades que se propenden está el contar con una malla vial eficiente y tranquila para su tránsito, además de ser una razonada contraprestación a favor del beneficiario que auxilia o tributa a la institución para alcanzar tal designio.

Así entonces, si es deber del Municipio de Santiago de Cali y de la secretaria de Infraestructura del Distrito, como se indicó en párrafos precedentes, la conservación y mantenimiento de las vías públicas, el acontecimiento generador del perjuicio tuvo una causa exclusiva: simplemente la omisión de la entidad de cumplir con sus tareas. Esto significa, que el primer elemento constitutivo de la falla del servicio, **la existencia del hecho irregular, está expresándose fehacientemente.**

Ha sido abundante la línea jurisprudencial reiterando la obligación indemnizatoria a cargo del estado por la omisión en el cumplimiento de dicho deber:

ABOGADOS & ASOCIADOS

El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del estado (municipio, departamento, nación, etc), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino, además, como una compensación razonable y justa para quienes, con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los

transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante²

Después reiteró igualmente el mismo cuerpo colegiado:

Pero si no puede exigir que el Estado únicamente construya vías seguras y elimine peligros potenciales de los transeúntes, si es obligación actual del Estado Colombiano ACTUAR ante los peligros reales a que se encuentren sometidos los residentes en el país. Y debe actuar en primer término evitando que las personas se sometan al peligro, proporcionando soluciones que logren no tener que sortear situaciones peligrosas, vigilando que las personas no pasen por aquellos sitios y en fin asumiendo una actitud positiva ante los hechos reales que pueden hacer perder la vida a los bienes de los asociados. Si como se ha dicho, el Estado posee una especie de poderes administrativos y policivos que le permiten delimitar el campo de la prestación de los servicios, lógicamente ante verdaderas situaciones de peligro debe utilizar estos poderes, pues no debe olvidar que su primerísima obligación es la de garantizar y proteger la vida y los bienes de sus miembros. En estos casos, si no podrá exonerarse de la obligación contenida en el artículo 16 de la C.N. aduciendo imposibilidad física de prevenir un daño o de evitarlo.³

Ahora bien, obviamente el hecho que se está endilgando a la institución demandada es el único factor que irrogó los perjuicios que se solicitan sean reparados.

La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en la ley, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8 del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos. En efecto se ha dicho.

“Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidades de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y

² CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 22 de septiembre de 1966, A.C.E año XLI, tomo LXX y LXXI, No. 409-412.

³ CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 7 de diciembre de 1997, C.P Dr. Julio César Uribe Acosta.

adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 197022. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que "tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este". Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas"⁴

El mantenimiento de una vía pública es obligación oficial que consiste en realizar permanentemente sobre ellas todas las obras y trabajos necesarios para que preste satisfactoriamente el servicio a que está destinada. Es deber del Estado (municipio, Departamento, Nación, etc.), velar en todo momento por esta misión y su cumplimiento, que no solo es instrumento material para realizar el derecho de tránsito o desplazamiento de un sitio a otro, que la ley garantiza a todas las personas, sino, además, como una compensación razonable y justa para quienes, con el cumplimiento de las cargas tributarias, han adquirido el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente el ejercicio del derecho de transitar no tiene por qué implicar riesgos diferentes de los que son inherentes a fallas de la conducta humana, o sea, de lo que pueden concebirse como independientes de la tarea del Estado respecto del instrumento para realizarlo, que son las vías de comunicación colocadas legal o convencionalmente bajo su responsabilidad. Esta supone un empeño constante para mantenerlas en tal estado de buen funcionamiento, que ni la integridad ni la vida de los transeúntes corra peligro alguno derivado de imperfecciones, daños o desperfectos, carencia de medidas cautelares u otro hecho semejante."⁵

⁴ GIL Botero Enrique. Temas de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Ed. Librería Jurídica Comlibros. Tercera edición. Bogotá D.C. septiembre de 2006. Pág. 248 a 250.

⁵ Sentencia del 22 de septiembre de 1966. A.C.E año XLI, Tomo LXX y LXXI, No. 409-412

Después reiteró igualmente el mismo Cuerpo Colegiado:

Pero si no puede exigir que el Estado únicamente construya vías seguras y elimine peligros potenciales de los transeúntes, si es obligación actual del Estado Colombiano ACTUAR ante los peligros reales a que se encuentren sometidos los residentes en el país. Y debe actuar en primer término evitando que las personas se sometan al peligro, proporcionando soluciones que logren no tener que sortear situaciones peligrosas, vigilando que las personas no pasen por aquellos sitios y en fin asumiendo una actitud positiva ante hechos reales que pueden hacer perder la vida o los bienes de los asociados. Si como se ha dicho, el Estado posee una especie de poderes administrativos y policivos que le permiten delimitar el campo de la prestación de los servicios, lógicamente ante verdaderas situaciones de peligro debe utilizar estos poderes, pues no debe olvidar que su primerísima obligación es la de garantizar y proteger la vida y los bienes de sus miembros. En estos casos, si no podrá exonerarse de la obligación contenida en el artículo 16 de la C.N. aduciendo imposibilidad física de prevenir un daño o de evitarlo.”⁶

Las condiciones están dadas efectivamente por la falta de protección, de seguridad a través de correcta señalización a lamentables acontecimientos, por más precavidos y cautelosos que sean los usuarios, porque tal vez lo que normalmente se acostumbra es desplazar la responsabilidad de la administración pública a la órbita del beneficiario del sector vial, situación a todas luces inexplicable pues no puede trasladarse un deber institucional a sus administrados, recordemos que el Estado es el que debe propender por brindar mejor calidad de vida.

2.2. Daño causado o nexo causal

Planteado que existió un hecho irregular de la autoridad pública, para poder invocar el deber indemnizatorio de la entidad estatal, encontramos asimismo que tal acto anómalo generó un perjuicio, un daño que surge única y exclusivamente del absurdo suceso. Como lo demostramos, el suceso desencadenó los perjuicios irrogados a los demandantes producto de la lesión de la señora Maria Camila Cabrera González tal como consta en su historial clínico.

2.3. Imputabilidad y causalidad.

Nuestra jurisprudencia ha decantado a partir de la lectura del artículo 90 constitucional que la responsabilidad patrimonial de una institución pública, deberá tenerse por probado el daño antijurídico y que éste pueda imputarse a la entidad acusada⁷

⁶ Sentencia del 7 de diciembre de 1997, C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta.

⁷ Con anterioridad a esta interpretación, la doctrina y la jurisprudencia descansó el concepto de responsabilidad en la existencia de tres elementos, el hecho, el daño y el denominado nexo de causalidad.

“La imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. (...) Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosóficojurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”. (...). Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. (...) la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico)”⁸

Podemos definir el nexo causal como la relación que debe existir entre el comportamiento o conducta del agente y el resultado desfavorable producido; esta confrontación causal tiene que hacerse a través de un estudio retrospectivo donde se **tienen en cuenta los sucesos acaecidos que se considera han sido el antecedente de la consecuencia producida**, teniendo siempre presente que en este proceso cada antecedente es un eslabón más de la cadena causal que ha intervenido en la generación del hecho que se investiga, en otros términos lo que se busca es demostrar la presencia de un vínculo necesario entre un antecedente (causa) y un consiguiente (efecto)

⁸ Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), radicación número: 25000-23-26-000-1998-00731-01(19434), Actor: Luis Enrique Ruiz Quiroga y otros vs Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Por consiguiente, para lograr establecer la causa en el evento sub-lite, debemos acudir al antecedente de la institución demandada, es decir la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y reglamentarios. Demostrando de forma contundente que la acción anormal fue la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá instarse a la institución pública el deber de resarcir toda lesión a bien jurídico o perjuicio originado a nuestros mandantes.

CONCLUSIÓN

Esto demuestra de forma contundente que el hecho imputado ha sido la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la omisión o irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto, al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá imponerse a la institución el deber de resarcir toda lesión o perjuicio originado a nuestros mandantes.

DEL MEDIO DE CONTROL A EJERCER

Esta controversia de carácter particular en vía judicial corresponde a una demanda de Reparación Directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.

MANIFESTACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

De conformidad con el literal d del Decreto 2511 de 1998, y del Decreto 1069 de 2015, nos permitimos manifestar bajo la gravedad de juramento que no hemos presentado demanda o solicitud de conciliación con base en los mismos hechos.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía de ciento setenta millones de pesos (\$ 170.000.000) correspondientes al "perjuicio material", en la modalidad de lucro cesante a favor de la reclamante Maria Camila Cabrera González.

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Solicitamos al señor Procurador Judicial delegado ante lo Contencioso Administrativo

se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la solicitud de convocatoria:

1. Poder debidamente otorgado por los demandantes
2. Fotocopia de los documentos de identidad de los demandantes
3. Fotocopia del registro civil de nacimiento de la señora Maria Camila Cabrera González
4. Fotocopia del registro civil de nacimiento de la señora Martha Lucia González Artunduaga
5. Fotocopia de registro civil de nacimiento del señor José Luis González Artunduaga
6. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Diana González Artunduaga
7. Informe de tránsito N° A001523601 elaborado por el agente de tránsito Hubert Castañeda, cc 94416334, placa 305
8. Prueba directa de alcoholemia resultado negativo
9. Formato de declaración de siniestros Soat
10. Denunció realizado ante fiscalía general de la Nación
11. Furips inicial de la atención recibida por la señora Maria Camila Cabrera
12. Informe pericial de Clínica Forense con N° UBCALCA-DSVA-03515-2023 elaborado por la profesional Maria José Benavides Erazo a los veintiséis (26) días del mes de marzo del 2023
13. Informe pericial de Clínica Forenses con N° UBCALCA-DSVA-12405 -2023 elaborado por la profesional Maria José Benavides Erazo a los veintiséis (26) días del mes de octubre del 2023
14. Factura N° 427802 emitida por la Sociedad Oyola S.A.S por concepto de arreglo del automotor involucrado
15. Factura N° 417214 emitida por la Sociedad Oyola S.A.S por concepto de arreglo del automotor involucrado
16. Factura gastos de transporte mes de octubre del 2022 firmada por el señor Jesús Orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
17. Factura gastos de transporte mes de noviembre del 2022 firmada por el señor Jesus orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
18. Factura gastos de transporte mes de diciembre del 2022 firmada por el señor Jesus orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de

placa EQM464

19. Factura gastos de transporte mes de enero del 2023 firmada por el señor Jesus orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
20. Factura gastos de transporte mes de febrero del 2023 firmada por el señor Jesus orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
21. Factura gastos de transporte mes de marzo, abril y mayo del 2023 firmada por el señor Jesus orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
22. Factura gastos de transporte mes de junio del 2023 firmada por el señor Jesus orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
23. Factura gastos de transporte mes de julio del 2023 firmada por el señor Jesús Orlando chaguendo quien presta sus servicios en el vehículo tipo taxi de placa EQM464
24. Factura de pago de semestre Universidad Santiago de Cali
25. Acta de cancelación de semestre del programa P545 Microbiología
26. Petición dirigida a la alcaldía Santiago de Cali en el mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) con radicado N° 202341730100522192 donde se solicita certificación en la que se indique qué entidad está a cargo del mantenimiento de la malla vial donde se presentó el accidente.
27. Respuesta a la petición dirigida a la alcaldía Santiago de Cali con fecha de veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), firmada por Eliana Martínez Tenorio- Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial.
28. Evidencia Fotográfica del lugar de los hechos en el cual ocurrió el siniestro vía
29. Licencia de conducción de la señora Maria Camila Cabrera González
30. Consulta del vehículo involucrado en el Runt
31. Consulta en el Simit
32. Fotografías de la siembra de microorganismos, donde se evidencia la siembra antes del accidente y después del accidente
33. Desprendible de nómina de la señora Maria Camila quien para la fecha de los hechos prestaba sus servicios en la empresa Organización Servicios y Asesorías S.A.S de los meses 07-31-2022, 08-31-2022, 9-15-2022, 9-30-2022, 10-15-2022,
34. Constancia de remisión de la convocatoria a conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las partes convocadas.

35. Acta de audiencia de conciliación expedida por la Procuraduría 59 Judicial I para asuntos administrativos de Santiago de Cali
36. Certificación expedida por la procuraduría 59 Judicial I para asuntos administrativos de Santiago de Cali.

**MEDIOS DE PRUEBA A PEDIR SEAN DECRETADAS POR EL DESPACHO EN EL MEDIO DE
CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA**

DOCUMENTALES

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva oficiar a la siguiente entidad **CLÍNICA COLOMBIA**

Instamos al señor Juez de Conocimiento acceder al petitorio del citado recaudo documental, pues previamente se intentó su obtención por peticiones, tal como lo indica el artículo 173 del Código General del Proceso, exceptuando los documentos que ostentan reserva, según las previsiones de ley.

Al señor Gerente/ director de CLÍNICA COLOMBIA ubicada en la carrera 46 No. 9c-85 para que se sirva remitir con destino a este proceso:

- a. Fotocopia autentica de la totalidad de la historia clínica, con ocasión a la atención brindada en dicha dependencia desde el 04 de octubre del año dos mil veintidós (2022) hasta la fecha.
- b. Expedir certificación en la que se indique los dineros cancelados en ocasión de la atención que le brindaron en dicho centro clínico.

TESTIMONIALES

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó lesionado la señora **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ**; en especial del supuesto fáctico tercero y siguientes del acápite de HECHOS de la reclamación, ratificaran el material documental obrante, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia:

LAURA MELISSA ESPAÑA CAICEDO identificada con cédula de ciudadanía N° 1.010.094.756 de Cali, residente en la calle 71 N° 11-48, correo electrónico laura-espana@correounivalle.edu.co, tel 3196869726

LINDA ISABEL SALINAS BRICEÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.077.720.113 de Pitalito, residente en la carrera 62 Bis # 6a-22 Urbanización Cañaveralejo, correo linda.salinas00@usc.edu.co, tel 3124664743

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los perjuicios físicos- psicológicos que generó el accidente a la señora **MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ**; en especial del supuesto fáctico sexto, séptimo, octavo y siguientes del acápite de HECHOS de la reclamación, ratificarán el material documental obrante, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia:

ALEXANDER PIAMBA ARCOS identificado con cédula de ciudadanía N° 94.428.059 de Cali, residente en la carrera 33 # 101-86 piso 2 Cali, correo e. alexander09piamba@gmail.com, tel 3136223115

CIELO DÍAZ CAMACHO identificada con cédula de ciudadanía N° 66.847.388 de Cali, residente en la carrera 26Q # 72T-33 Cali, correo cdcielodiaz@gmail.com, tel 3207535422

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a la presente diligencia al guarda de tránsito que atendió el accidente, identificado como Hubert Castañeda Gil CC. 94416334 placa 305. Adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali para que, con apoyo del informe de tránsito aportado en la relación de medios probatorios, asimismo con el apoyo de las fotografías aportadas en el libelo demandatorio, se sirva lo que recuerde en tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito donde resultó lesionada mi poderdante, asimismo se sirva indicar las condiciones de la vía para la fecha de los hechos.

INTERROGATORIO DE PARTE

Atendiendo la posibilidad que permite el artículo 198 de la ley 1564 de 2012⁹, pedimos respetuosamente al despacho se sirva disponer la citación de la señora MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 1.193.572.134 de Cali

⁹ El artículo 203 de la legislación adjetiva anterior consagró la figura del interrogatorio a instancia de parte, medio de prueba que consistía en que cualquiera de las partes podía pedir la citación de la contraria a efectos de interrogarla sobre hechos relacionados con la litis. Sin embargo, en la ley 1564 de 2012, bajo esta misma figura se permite la citación a instancia de cualquiera de las partes, aún de su mismo apoderado, desapareciendo la restricción en su petición, es decir que únicamente se hacía respecto de la parte

PERICIALES

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 el artículo 212 de la ley 1437 de 201131, solicitamos al H. Juez de Conocimiento que una vez allegada la historia clínica pedida se sirva ordenar la siguiente pericia, encaminada a demostrar el daño alegado, en especial sobre los supuestos TERCERO y NOVENO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio

Remitir a MARIA CAMILA CABRERA GONZALEZ , titular de la cédula de ciudadanía No. 1.193.572.134 de Cali (V), a la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Valle del Cauca, ubicado en la calle 5 E No. 42 - 44 – Santiago de Cali; para que le sea practicado un reconocimiento médico y se sirvan determinar a pérdida de capacidad laboral, como consecuencia de las afecciones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas derivadas del evento sufrido el día cuatro (04) de octubre del 2023.

ABOGADOS & ASOCIADOS

ANEXOS DE LA DEMANDA

Nos permitimos aportar con el libelo de la demanda

Los documentos señalados en el acápite de RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

NOTIFICACIONES

contraria. La declaración de la parte, por su manifiesto interés personal en el resultado favorable, históricamente ha estado en el centro de intensas polémicas. Se rechazó su confiabilidad respecto de los hechos que benefician al declarante, especialmente en el revaluado sistema probatorio del proceso esencialmente escrito, donde se limita la eficacia probatoria de la declaración de parte a la confesión y el juramento probatorio, estimatorio o deferido por la ley. No obstante, los modernos sistemas que adoptan la victoriosa oralidad, entre ellos el del CGP, al acrecentar la inmediación y la libre valoración de las pruebas, engrandecen el significado principal del contacto personal e inmediato del juez con las partes y prácticamente sin excepción reconocen el vigor y la eficacia probatoria de la simple declaración de parte, obtenida en un interrogatorio libre que podrá ser ordenado por el juez en cualquier momento con fines aclaratorios o de clarificación, sin perjuicio del interrogatorio formal o de absolución de posiciones que tradicionalmente era el único que se practicaba, a solicitud de los litigantes, con miras a obtener la confesión de la contraparte. CANOSA Suárez, Ulises. "Código General del Proceso. Aspectos Probatorios" en XXXIII, Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. Bogotá D.C. – Colombia. Primera Edición - septiembre 2012. En este sentido el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia de la Dra. Zoranny Castillo en auto interlocutorio 396 del 11 de diciembre de 2018 dentro del proceso radicado bajo el número 7600013333016201700069, Demandante: Andrés Perea Hurtado, Demandado Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, sostuvo: Así entonces, sobre la procedencia del decreto de la prueba el despacho revocará la decisión considerando que, si bien es cierto del enunciado inicial del artículo 184 del CGP transcrito podría inferirse que solo puede citarse a interrogatorio a la contraparte, lo cierto es que de la totalidad del capítulo que regula la práctica, y finalidad de la prueba se infiere que ella no está limitada a tal evento; el hecho de que la confesión en materia contenciosa no esté prosrita, excepto para los representantes legales de las entidades públicas por expresa disposición del artículo 195 ob. cit., permite colegir que nada impide que la propia parte pida su interrogatorio y asuma sus efectos en caso de que se den los requisitos del artículo 191 ídem para que se tenga como hecho confesado. Lo anterior, aunque parezca ilógico, encuentra fundamentos en que el proceso oral por audiencias en donde se privilegia el principio de inmediación de la prueba, permite con el interrogatorio de parte, en el cual incluso se puede hacer diligencia de reconocimiento de documentos, provocar confesión, etc. que el Juez y la propia contraparte se haga una mejor idea de la teoría de caso de la parte interesada autocitante provoque un ejercicio de contradicción de la prueba de mayor complejidad y por ende un despliegue de mejor manera el derecho a la defensa incluso tiene un efecto psicológico en el debate al poder conocer el sentir y como lo expresa la parte interesada. (Negrilla fuera de texto)

El suscrito apoderado

Calle 11 N° 5-61 edificio Valher- Cali, oficina 705

Correo electrónico. agtabogadosyassociados@gmail.com

Los demandantes

Correo e. agtabogadosyassociados@gmail.com

Las entidades demandadas

Municipio de Santiago de Cali, representado por el alcalde, el Doctor Jorge Iván Ospina o quien haga sus veces, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de Cali,

Correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co

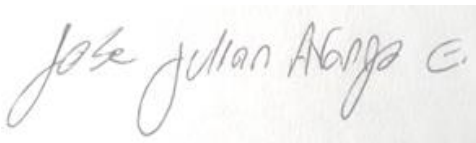
Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali, representado por el alcalde, el Doctor Jorge Iván Ospina o quien haga sus veces, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte No. 10 – 70 de Cali, teléfono 8810036

Correo electrónico notificacionesinfraestructura@cali.gov.co

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Carrera 7 No 75-66 Centro Empresarial C75- Bogotá
Teléfono (2558955)

Correo electrónico. Procesos@defensajuridica.gov.co

Del Honorable Juez,



JOSÉ JULIÁN ARANGO ESCOBAR
C.C. No.1.116.258.847 de Tuluá
T.P. No. 352.270 del C.S.J
ABOGADO